

Jueves 10 de mayo del 2001

• TRANSICIONES •

Víctor Alejandro Espinoza Valle



Saldos

El PRD ha dilapidado gran parte de su capital político en las últimas semanas. No me refiero sólo a lo que ha sucedido a nivel nacional, sino a la coyuntura local. En la dimensión nacional el último desaguisado ha sido su contradictoria política hacia el problema de Chiapas; en particular, la forma en como votaron la Ley de Derechos y Cultura Indígena. Como sabemos, dicha ley fue aprobada por todas las fracciones del Senado, incluyendo por supuesto a los senadores del PRD; posteriormente la rechazaron los diputados del mismo partido alegando que se distanciaba de la propuesta original sometida por el presidente Vicente Fox, iniciativa conocida como la Ley de la Cocopa. Y su rechazo fue estridente, pues abandonaron la Cámara de Diputados en el momento en que se iba a realizar la votación. Ante esta situación tan contradictoria tuvo que salir su dirigente máxima, Amalia García, a tratar de dar las explicaciones mínimas que el caso requería.

En el plano estatal, la postulación, primero, de Federico Sánchez Scott como candidato a Gobernador y su posterior declinación en favor de Héctor Manuel Gallego García, fue vista como un síntoma inequívoco de la falta de visión y de estrategia política para enfrentar los tiempos electorales. Por si no fuera suficiente, la nueva declinación de Gallego García y la repostulación de Sánchez Scott han acabado de descomponer el cuadro. Parece muy difícil que el partido del Sol Azteca pueda remontar los efectos de tan absurda política electoral.

Algunos analistas ha señalado que el PRD pudiera haberse visto envuelto en una estrategia maquiavélica para beneficiar al candidato de la Alianza por Baja California, Eugenio Elorduy Walthier. El "Nene" Gallego habría intentado debilitar a su partido, el PRI, participando como precandidato a la gubernatura para señalar errores y restarle méritos a quien resultase electo en la contienda interna. Después de que hubo renunciado al PRI, su postulación como candidato al PRD habría tenido el mismo objetivo. Una vez que Elorduy obtuviera la gubernatura, Gallego García se presentaría a cobrar la factura. Si esta estrategia existió o no algún día se sabrá; lo cierto es que esos fueron los efectos y el beneficiario.

La doble candidatura de Gallego García deja otras enseñanzas e involucra a la UABC. Como ex rector y presidente de su Junta de Gobierno, Gallego rompió con el falso discurso de que los universitarios no deben hacer política. Desde la década de los ochenta sus rectores machaconamente insisten en que son "apolíticos", aunque casi todos hayan pertenecido al PRI. Esta absurda reivindicación sirvió de pretexto para desterrar de la universidad cualquier asomo de reflexión y hasta de agudeza intelectual. Pero no es que alguna corriente del pensamiento se haya impuesto sobre otras en el ámbito académico, se hizo con armas y fuego justo durante los periodos de Rubén Castro Bojórquez y de Gallego García. Las palabras disensión, democracia, diálogo, negociación, tolerancia, respeto, quedaron desterradas de nuestra universidad, dando al traste con la misión que debe cumplir la institución. A propósito dice Mario Vargas Llosa: "La obligación de una universidad no puede ser sólo la de formar buenos profesionales, y menos en un país con los problemas básicos de la civilización y la modernidad sin resolver. Es igualmente imprescindible que contribuya a formar buenos ciudadanos, hombres y mujeres sensibles respecto a la sociedad en que viven, alertas a sus retos, a sus abismales disparidades, y conscientes de su responsabilidad cívica. Una universidad que evita la política es tan defectuosa como aquélla donde sólo se hace política" (Frontera, abril 30 de 2001).

Quizás sea lo único que debemos agradecer del affaire de Gallego con el PRI y el PRD: En adelante los universitarios y sus autoridades no deberán de hablar de política en lo oscuro. Si el presidente de su Junta de Gobierno -que dicen los que saben, es quien nombra a los rectores- ha transitado entre el PRI y el PRD en los últimos días, difícilmente alguien puede tener argumentos -y cara- para tratar de desterrar al universitario que decida abrazar alguna(s) de las causas que nos ofrece el abanico político mexicano. Y si decide no opinar, o no participar, debe ser también un derecho inalienable. Lo que ya no se vale en la universidad es no pensar.

El autor es politólogo, secretario general académico de el Colegio de la Frontera Norte.